

Partidos Políticos, nuevos sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información

RICARDO RAYA ARANDA¹

RESUMEN.

Los partidos políticos son definidos como entidades de interés público cuyo objeto fundamental es posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público; sin embargo, actualmente el sistema electoral mexicano ha sufrido un desgaste, motivado en gran medida por la desconfianza existente en las instituciones electorales y, particularmente, en los partidos políticos.

Como un componente sustancial de los sistemas democráticos, no debe perderse de vista que la transparencia, entendida como una política pública construida a partir de la idea de someter a escrutinio información clara, completa, accesible e inteligible sobre diversos aspectos de las funciones gubernamentales, tiene entre sus finalidades legitimar y fortalecer la confianza del pueblo en las instituciones públicas.

De tal forma, con la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 y la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2015, se modificó sustancialmente el marco normativo que reconoce y garantiza, a toda persona, el derecho de acceso a la información pública, instituyendo a los partidos políticos como sujetos obligados de forma directa al cumplimiento de la normativa en la materia.

Asimismo, recientemente el 9 de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objetivo de transparentar el ejercicio de la gestión pública y favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados, entre los cuales se encuentran los partidos políticos; con lo anterior, se terminó de delinear el contexto jurídico al que deberán apegarse los nuevos sujetos obligados en materia de transparencia.

En consecuencia, es necesario que los partidos políticos tomen conciencia y lleven a cabo las acciones que estimen pertinentes para ajustar su actuación a las nuevas obligaciones que les han sido impuestas para asegurar el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.

En tal virtud, la presente ponencia tiene por objeto reflexionar sobre la forma en que los partidos políticos nacionales deberán afrontar las nuevas obligaciones a su cargo en materia

¹ Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Subdirector en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, r_raya1987@gmail.com.

de transparencia y acceso a la información pública como actores del sistema político electoral mexicano.

PALABRAS CLAVE.

Documento.- cualquier tipo de registro que evidencie el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente, fecha de elaboración o medio en el que se encuentre.

Información pública.- toda aquella contenida en cualquier clase de documento, con independencia del tipo de soporte en el que se encuentre, que generen, obtengan, adquieran, conserven, posean o detenten los sujetos obligados.

Partidos políticos.- entidades de interés público que tienen entre sus fines hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público.

Sujetos obligados (en materia de transparencia).- cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Transparencia.- política pública constituida por el conjunto de acciones, decisiones y directrices dirigidas a los órganos del Estado y sus funcionarios con el objeto de someter al escrutinio público, información clara, precisa, accesible y abundante sobre los diversos ámbitos del quehacer gubernamental.

INTRODUCCIÓN.

La idea central de lo que implica un sistema democrático, actualmente, ha roto el paradigma tradicional que lo definía como “el gobierno del pueblo”, para tener una aproximación garantista y progresista que comprende el pleno respecto a los derechos fundamentales de los individuos.

Con base en lo anterior, desde la antigüedad se han desarrollado formas de controlar el ejercicio del poder político, las cuales pueden y deben ser retomadas a través de la implementación de políticas públicas que acerquen a la población a los asuntos gubernamentales y permitan conocer la manera y las razones por la que se llevan a cabo determinados actos por parte de los gobernantes.

Actualmente, la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y en el sistema electoral mexicano, particularmente en el caso de los partidos políticos, ha disminuido considerablemente, lo cual puede verse claramente en el elevado índice de abstencionismo registrado en los más recientes procesos electorales.

De tal forma, se estima que la transparencia puede tratarse de una política pública que debe ser tomada en cuenta como parte indispensable en un gobierno democrático para contribuir

a formar una opinión pública informada y con ello permitir a la colectividad formarse un juicio de valor respecto de los funcionarios que los gobiernan y representan.

TRANSPARENCIA.

Según Eduardo Guerrero Gutiérrez “la palabra transparencia [...] se utiliza generalmente de tres maneras: como cualidad de un objeto, como atributo de un sujeto y como atributo de un grupo o colección de sujetos (por ejemplo un partido político, un sindicato, una agrupación gremial o un gobierno)...” (Guerrero, 2008:11 y 12).

En ese orden de ideas, la primera acepción propuesta por el autor de referencia hace alusión a una propiedad física de la materia, pues se afirma que un cuerpo posee la cualidad de ser transparente cuando permite el paso a la luz y, en consecuencia, a través del mismo pueden verse los objetos claramente (Real Academia Española, 2016).

La segunda definición mencionada, señala que se trata de un atributo de una persona que actúa de manera sincera o abierta, es decir, que no oculta nada; con lo cual se apela a la cualidad moral de un individuo que busca actuar con claridad.

Finalmente, la tercera forma de entender el vocablo “transparencia” resulta más aplicable al ámbito de las instituciones públicas, pues indica que un ente colectivo es transparente cuando hace pública, o entrega a cualquier persona interesada, información sobre su funcionamiento y procedimientos internos, sobre la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros, sobre los criterios con que toma decisiones, sobre la calidad de los bienes o servicios que ofrece, etcétera.

Sin perder de vista esta última idea, es claro que la transparencia aplicada al ámbito la teoría política, puede ser entendida como una política pública constituida por el conjunto de obligaciones, principios y directrices encaminados al sector gubernamental y los servidores públicos que lo integran, para someter al escrutinio de la población información y documentación sobre el quehacer gubernamental, para controlar el ejercicio del poder público.

TRANSPARENCIA Y SUS APLICACIONES PRÁCTICAS.

Ahora bien, una vez explicado el concepto de transparencia, es conveniente aterrizar lo señalado por la doctrina, exponiendo el papel que, en la práctica, se estima que puede llegar a desempeñar en los regímenes democráticos, o al menos los principales aspectos que pretenden justificar ideológicamente su implementación. En ese sentido, se pueden mencionar las siguientes aplicaciones prácticas (Aguilar, 2008:28-32):

i) Permite evaluar el desempeño de los funcionarios. En una democracia representativa, los ciudadanos generalmente premian o castigan el desempeño de sus gobernantes al término de su gestión, y para ello es necesario que cuenten con información suficiente sobre el desempeño de su cargo, así como sus acciones y sus logros. Tradicionalmente esta función es llevada a cabo por los medios de comunicación, pero la transparencia también resulta particularmente importante toda vez que permite a cualquier persona, de manera directa o

indirecta, tener acceso a la información que le interesa de manera particular, para que puedan valorar la actuación de los funcionarios públicos.

Por tal motivo, la transparencia plantea una diversificación de los mecanismos de vigilancia y evaluación, puesto que con la publicidad de la información gubernamental se genera un sistema de control político multilateral, en el que todos los individuos se pueden convertir potencialmente en evaluadores, porque cualquiera puede acceder a la información públicamente disponible y, en consecuencia, contar con elementos suficientes para formarse un juicio de valor respecto del ejercicio del poder público por parte de sus gobernantes.

ii) Permite a los individuos controlar el ejercicio del poder político. De acuerdo con Jeremy Bentham "... cuanto más expuesto está el ejercicio del poder político a un sin número de tentaciones, tanto más poderosos motivos conviene dar a los que están revestidos con él para desecharlas. Pero la vigilancia del público es el más contante y universal de todos ellos..." (Bentham, 1829).

Efectivamente, la transparencia es considerada como uno de los instrumentos que, en un gobierno democrático, sirve para limitar el ejercicio del poder del Estado. Al igual que el principio de división de poderes, así como el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, la transparencia sirve para limitar el poder político. Este control se lleva a cabo a través de la vigilancia y la evaluación de las acciones de los funcionarios, a la vez que sirve para disuadir las conductas indebidas en el ejercicio de sus respectivos cargos.

Lo anterior se estima de esa forma, pues es evidente que la actuación de quien se sabe observado, o al menos tiene la conciencia de que todas sus acciones están sometidas al escrutinio público, es distinta de la de aquél individuo que se encuentra actuando en secrecía (Guerrero, 2005:50).

iii) Permite legitimar a la autoridad política y fortalecer la confianza en los gobernantes. Un paradójico efecto de la transparencia es que no sólo sirve para limitar el ejercicio del poder público, sino que también permite robustecerlo, en virtud de que el conocimiento de la información gubernamental fomenta la confianza en la ciudadanía y aumenta la posibilidad de que el pueblo apoye las decisiones adoptadas, por ello se estima que la transparencia funge como un elemento legitimador del quehacer gubernamental, pues permite a los órganos estatales contar con el respaldo de la población.

En ese tenor, la transparencia puede facilitar la coordinación de las actividades entre gobernados y gobernantes, pues en la medida en que aumente la confianza entre éstos, también crecerá la probabilidad de que los individuos apoyen las decisiones y los actos gobierno, al estar en posibilidad de conocer qué se hace, para qué se hace y porqué se hace.

Sin embargo, considerando que la confianza a que se ha hecho referencia tiene sustento en instancias que constantemente monitorean el comportamiento de los agentes gubernamentales y que permiten sancionarlos cuando sea necesario, siempre será de especial relevancia generar conciencia en los gobernados para que se interesen por mantenerse informados sobre los asuntos públicos y, en esa medida, los mecanismos que plantea la idea

de la transparencia coadyuven a esta importante labor, al facilitar que los individuos cuenten con información pertinente y adecuada, para la toma de decisiones.

iv) Permite advertir errores y corregirlos. A través de la transparencia la ciudadanía puede detectar las fallas y defectos de las políticas públicas o acciones de gobierno en un momento en que aún permitan corregirse. De hecho, la idea de la transparencia y el acceso a la información se ha planteado de forma tal que si funcionan adecuadamente, impide a los gobernantes invocar la secrecía y aislarse de críticas y, en cambio, propicia que la toma de decisiones sea a conciencia, haciendo más sencillo aprender de los errores y corregirlos (Holmes, 1995:6).

En esa tesitura, la ciudadanía crítica funciona como un mecanismo que el gobierno puede utilizar para identificar y corregir errores, pero para operar de esa forma es necesario que las personas sean capaces de acceder directamente a información confiable, con la finalidad de que puedan conocer las decisiones tomadas en el interior del aparato gubernamental, así como las razones que las motivan y justifican.

En síntesis, “transparencia” significa el deber de los gobernantes para realizar sus actuaciones de manera pública como un mecanismo de control del poder y, a su vez, como instrumento de legitimidad democrática de las instituciones públicas (Villanueva, 2005:63-64).

PARTIDOS POLÍTICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

El artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a los partidos políticos como entidades de interés público, lo cual implica básicamente el otorgamiento de prerrogativas tales como acceso a medios de comunicación, financiamiento para sus actividades ordinarias, sus campañas electorales y la posibilidad de intervenir en las elecciones federales, estatales y municipales.

Asimismo, en el mismo artículo 41, base I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica que los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, así como hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan.

Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado que la naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público, también los convierte en copartícipes de la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información oportuna y veraz, y los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su vida interna (<http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=13/2011>, 2011).

En ese sentido, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, a través del cual se fortalecieron las bases del marco normativo que establece los principios de la transparencia

en el sistema jurídico mexicano y reconoce el derecho fundamental de acceso a la información pública.

Uno de los más importantes avances en la materia es el nuevo catálogo de sujetos obligados establecido por el artículo 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, por regla general es pública.

En estrecha relación con lo anterior, la fracción V del artículo constitucional en comento indica que los sujetos obligados referidos en el párrafo anterior deben conservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicar, a través de medios electrónicos, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos que reciben, así como los indicadores que permitan dar cuenta del cumplimiento de sus objetivos y resultados.

Adicionalmente, el artículo 6, apartado A, fracción VIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previó la creación de un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, el cual tendría competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

Con base en lo expuesto, resulta innegable que los partidos políticos se deben considerar actualmente como sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información; máxime, si se toma en cuenta que reciben financiamiento público para el desarrollo de sus actividades ordinarias y extraordinarias, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 7 de febrero de 2014, dispusieron que las nuevas atribuciones y competencias en la materia serían ejercidas conforme a la normatividad vigente, hasta que el Congreso de la Unión expidiera la ley general y llevara a cabo las reformas correspondientes los ordenamientos legales necesarios, incluyendo la legislación en materia electoral.

Sobre el particular, es conveniente distinguir entre las dos clases de sujetos obligados al cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia, en función de la forma en que deben cumplir sus obligaciones: directos e indirectos, a saber:

1. Directos: son aquellas instancias que se encuentran obligadas a dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información por sí mismas, sin necesidad de intermediarios.
2. Indirectos: se trata de aquellos “sujetos obligados” que deben cumplir la normatividad de transparencia y acceso a la información que detentan, pero a través de otra entidad u organismo que funge como intermediario.

En ese orden de ideas, previo a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien los partidos políticos eran considerados sujetos obligados, lo cierto es que lo eran de forma indirecta, toda vez que los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales en el ámbito federal, en términos del artículo 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en adelante LFTAIPG)², debía solicitarse información relativa al uso de los recursos públicos que reciben, por conducto del entonces Instituto Federal Electoral (actualmente Instituto Nacional Electoral).

En consonancia con el régimen transitorio del multicitado Decreto de reforma constitucional, vigente en 2014, el 23 de mayo de ese año fue publicada la Ley General de Partidos Políticos, en cuyo artículo 28, párrafo 1, se estableció que el organismo garante en materia de transparencia tendría competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos. Asimismo, el 2 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública (http://norma.ine.mx/documents/27912/276854/2014_Acuerdo_CG70.pdf/1b8cdd35-5ca8-4624-9346-06987d24a0fb), de cuyo artículo Segundo Transitorio se puede desprender que dicho Instituto asumió su competencia para conocer los asuntos vinculados con el acceso a la información en posesión de los partidos políticos, hasta que entrara en vigor la legislación que derivara de la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

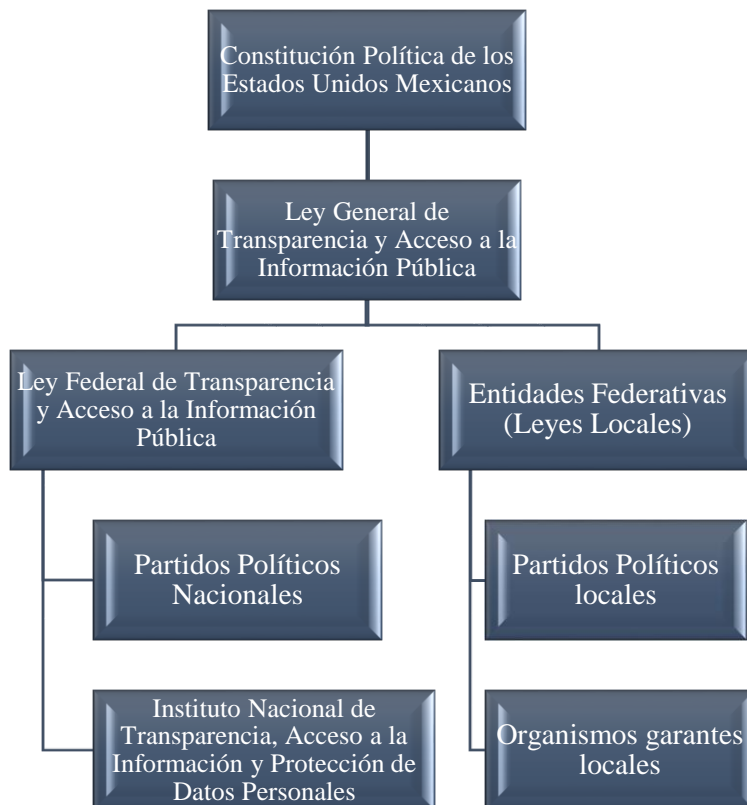
No obstante, el 4 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LGTAIP), con el objeto de establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

En esa tesitura, la expedición de la LGTAIP significó el inicio de la configuración normativa de los principios establecidos en la reforma constitucional de 2014, con el objeto de

² Abrogada mediante Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016.

garantizar la implementación de las bases contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

FIGURA 1
MODELO ACTUAL DE TRANSPARENCIA



Fuente: elaboración propia.

De ese modo, el artículo 23 de la LGTAIP dispone que entre los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obra en su poder se encuentra cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

Al respecto, no debe pasar desapercibido que el 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante LFTAIP), en cuyo artículo 1 se establecen los mismos sujetos obligados referidos en el párrafo anterior, entre los cuales se encuentran expresamente contemplados los partidos políticos.

OBLIGACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En términos de lo dispuesto por los artículos 24 de la LGTAIP y 11 de la LFTAIP, para el cumplimiento de los objetivos de dicho ordenamiento legal, entre los cuales se encuentra

principalmente promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región, los sujetos obligados deben cumplir con las siguientes obligaciones comunes:

- Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento.
- Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia.
- Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme parte de los Comités y Unidades de Transparencia.
- Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental.
- Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles.
- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.
- Reportar a los organismos garantes competentes sobre las acciones de implementación de la normatividad en la materia.
- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los organismos garantes.
- Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos.
- Cumplir con las resoluciones emitidas por los organismos garantes.
- Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia.
- Difundir proactivamente información de interés público.
- Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que puedan auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información en lengua indígena, braille o

cualquier otro ajuste razonable con el formato accesible correspondiente, en la forma más eficiente.

- Promover la digitalización de la información en su posesión y la utilización de las tecnologías de información y comunicación.
- Dar atención a las recomendaciones de los organismos garantes.
- Las demás que resulten de la normatividad aplicable.

Al respecto, se estima conveniente destacar la importancia de algunas de las obligaciones comunes a todos los sujetos obligados, que los partidos políticos deben cumplir a cabalidad en términos del marco normativo en materia de transparencia:

a) Constituir el Comité de Transparencia y la Unidad de Transparencia.- todos los sujetos obligados deben incluir como parte de su estructura orgánica y destinar recursos humanos, materiales y financieros para el establecimiento de unidades administrativas específicas para la atención de solicitudes de información y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia las cuales se denominarán Unidades de Transparencia y designar a los integrantes del Comité de Transparencia³.

b) Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental.- implica generar la conciencia institucional de documentar toda actuación que se origine con motivo del ejercicio de las atribuciones y facultades del sujeto obligado, así como la conformación de un sistema institucional de archivos que facilite la organización de la información y documentación generada, especialmente aquella que debe considerarse pública.

c) Proporcionar capacitación continua y especializada.- considerando la obligación de establecer unidades administrativas específicas para dar atención a cuestiones vinculadas con la transparencia y el acceso a la información, es claro que los sujetos obligados deben contar con personal especializado y profesional con conocimientos en la materia, por lo que se requiere la implementación de programas de capacitación y actualización dirigidos, particularmente, al personal que conforma el Comité y la Unidad de Transparencia, sin dejar de lado a todos los demás funcionarios de los sujetos obligados.

d) Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones, criterios y resoluciones que emitan los organismos garantes.- como se ha explicado previamente, los partidos políticos ahora se encuentran sujetos a la competencia de los organismos garantes en materia de

³ De acuerdo con los artículos 44 de la LGTAIP y 65 de la LFTAIP, al Comité de Transparencia le corresponde: Instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; confirmar, modificar o revocar las determinaciones en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia; promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; establecer programas de capacitación y actualización en materia de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, para todos los servidores públicos o integrantes del sujeto obligado.

transparencia y acceso a la información, por lo que están obligados a cumplir las determinaciones y resoluciones que emitan, como en su momento lo hacía el Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información y el Comité de Información del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia.

e) Obligaciones de transparencia.- de acuerdo con los artículos 70 de la LGTAIP y 68 de la LFTAIP, constituye la información mínima que los sujetos obligados deben poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos y sitios web correspondientes, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, sin que se requiera una solicitud para tal efecto.

En relación con este último punto, es conveniente hacer especial énfasis, toda vez que existen obligaciones de transparencia comunes a todos los sujetos obligados y, de forma adicional, se han establecido temas y documentos específicos para ciertos sectores que también deben estar disponibles a través de medios electrónicos.

Por lo que hace a las obligaciones de transparencia que todos los sujetos obligados deben atender, el artículo 70 de la LGTAIP dispone que deberán poner a disposición del público, por lo menos, la información relativa a los temas que a continuación se indican:

- i. El marco normativo aplicable al sujeto obligado.
- ii. Su estructura orgánica completa.
- iii. Las facultades de cada área.
- iv. Las metas y objetivos de las áreas.
- v. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social.
- vi. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.
- vii. El directorio de todos los servidores públicos.
- viii. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza.
- ix. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
- x. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes.
- xi. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.

- xii. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen.
- xiii. El domicilio y dirección electrónica de la Unidad de Transparencia.
- xiv. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y sus resultados.
- xv. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos.
- xvi. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos.
- xvii. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto.
- xviii. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas.
- xix. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos.
- xx. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.
- xxi. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto.
- xxii. La información relativa a la deuda pública.
- xxiii. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad.
- xxiv. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.
- xxv. El resultado de la dictaminación de los estados financieros.
- xxvi. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o realicen actos de autoridad.
- xxvii. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados.
- xxviii. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.
- xxix. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

- xxx. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.
- xxxi. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero.
- xxxii. Padrón de proveedores y contratistas.
- xxxiii. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado.
- xxxiv. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad.
- xxxv. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención.
- xxxvi. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio.
- xxxvii. Los mecanismos de participación ciudadana.
- xxxviii. Los programas que ofrecen.
- xxxix. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados.
- xl. Las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos.
- xli. Los estudios financiados con recursos públicos.
- xlii. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben.
- xliii. Los ingresos recibidos por cualquier concepto, así como su destino.
- xliv. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.
- xliv. El catálogo de disposición y guía de archivo documental.
- xlvi. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos.
- xlvii. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y

los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente.

- xlvi. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Es importante destacar que no todas las obligaciones de transparencia referidas resultan aplicables a todos los sujetos obligados por igual, por lo que deben tomarse en cuenta las facultades, atribuciones, funciones u objeto social de cada sujeto obligado para determinar con claridad cuáles deben ser atendidas, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos.

Adicionalmente, en el artículo 76 de la LGTAIP y 74, último párrafo, de la LFTAIP, se establecen las obligaciones de transparencia específicas a cargo de los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociaciones civiles creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, entre las cuales se encuentran las siguientes:

- El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia.
- Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos.
- Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil.
- Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios.
- Las minutas de las sesiones de los partidos políticos.
- Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos.
- Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político.
- Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes.
- Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados.
- El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas.
- El acta de la asamblea constitutiva.
- Las demarcaciones electorales en las que participen.

- Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión.
- Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos ámbitos.
- El directorio de sus órganos de dirección nacionales, estatales, municipales, del Distrito Federal y, en su caso, regionales, delegacionales y distritales.
- El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos directivos nacionales, estatales y municipales y de los demás funcionarios partidistas, así como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político.
- El currículum con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa.
- El currículum de los dirigentes a nivel nacional, estatal y municipal.
- Los convenios de frente, coalición o fusión que celebren o de participación electoral que realicen con agrupaciones políticas nacionales.
- Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de elección popular.
- Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad interna.
- Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
- Las resoluciones dictadas por los órganos de control.
- Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en cualquier modalidad, a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como los descuentos correspondientes a sanciones.
- El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los documentos anteriores.
- Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier nivel, una vez que hayan causado estado.

- Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente.
- Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos internos de selección de candidatos.
- El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto.
- Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto de los informes de ingresos y gastos.

Sin embargo, resulta indispensable señalar que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia se sujetó al cumplimiento de algunas condicionantes establecidas por los legisladores, toda vez que en el artículo Octavo Transitorio de la LGTAIP se dispuso que en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor (antes del 5 de mayo de 2016), se debían emitir los lineamientos que regularían la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados deberían cumplir sus obligaciones de transparencia.

En ese sentido, el 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

En el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo de referencia se estableció que a partir de su entrada en vigor habría un periodo de 6 meses para que los sujetos obligados del ámbito federal, estatal y municipal incorporaran a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia la información relativa al cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

CONCLUSIÓN.

En tal virtud, como se ha expuesto previamente, si bien el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso a la información se encuentra plenamente vigente, se ha establecido un periodo de tiempo para que los sujetos obligados cumplan con algunas de las disposiciones legales, por ejemplo, las relativas a las denominadas “obligaciones de transparencia” que implican poner a disposición a través de medios electrónicos diversa información y documentación sobre temas que se estiman de gran relevancia para la opinión pública.

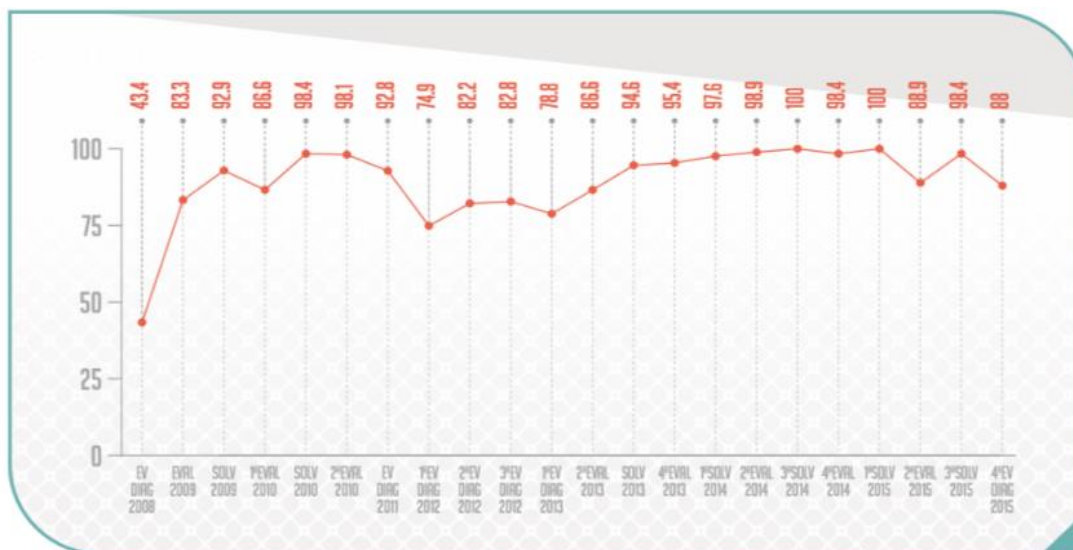
Sin embargo, el periodo de 6 meses otorgado se encuentra próximo a concluir por lo que los sujetos obligados, entre ellos los partidos políticos, deben implementar todas las actividades

que estimen convenientes para estar en posibilidad de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones adquiridas, en el caso concreto, las relativas a la divulgación y actualización de información pública a través de medios electrónicos.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que los partidos políticos continúan estando bajo la supervisión y vigilancia del Instituto Nacional Electoral en otras materias, tales como procesos electorales y fiscalización, en términos de lo que establece la normatividad electoral, por lo que el cumplimiento de sus obligaciones previstas en la LGTAIP y la LFTAIP tampoco debe significar que descuiden el cumplimiento de las demás disposiciones que les resultan aplicables.

A manera de ejemplo, se estima pertinente resaltar algunos datos respecto del cumplimiento de los partidos políticos a sus obligaciones de transparencia en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en donde han sido evaluados desde 2008 y siguen mostrando un comportamiento favorable en su desempeño en el índice de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, cuyo promedio global por evaluación puede observarse en la siguiente gráfica:

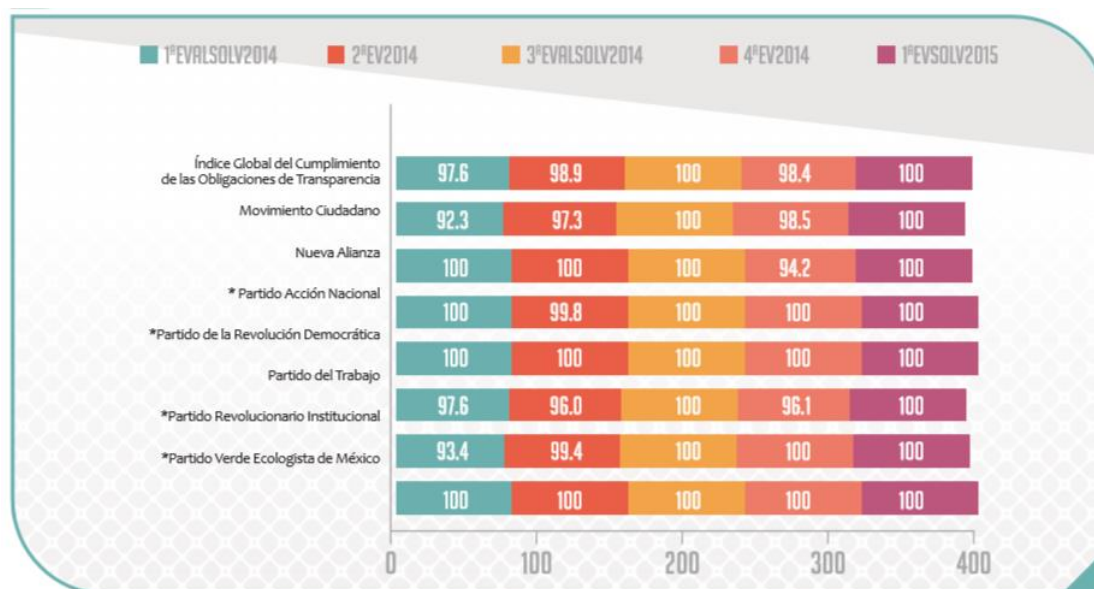
FIGURA 2
ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL DISTRITO FEDERAL (2008-2015)



Fuente: INFODF, 2015

Asimismo, los resultados obtenidos por el organismo garante en la ahora Ciudad de México en la Primera Evaluación 2015, registran que el índice desglosado de los Partidos Políticos alcanzó 100 puntos, es decir, un cumplimiento cabal a sus obligaciones de transparencia, a saber:

FIGURA 3
DESGLOSE POR PARTIDO POLÍTICO EN EL DISTRITO FEDERAL DEL ÍNDICE GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA



Fuente: INFODF, 2015

En esa tesitura, quienes integran el desgastado sistema político electoral mexicano, tanto autoridades como actores, tienen una gran oportunidad de recobrar parte de la confianza perdida por el electorado, puesto que a través de la transparencia y el acceso a la información pueden someterse al escrutinio público para acercar a los ciudadanos las actividades y asuntos de las funciones electorales y, de esta forma, empoderar a los votantes ante los procesos electorales por venir.

Para tal efecto, tanto los partidos políticos y sus funcionarios como los principales actores en materia electoral deben comprometerse con el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de transparencia para salir de la opacidad y la secrecía en el manejo de recursos públicos y transitar hacia una cultura de la transparencia en la que cualquier persona interesada pueda conocer el origen y destino del financiamiento que reciben para actividades ordinarias y extraordinarias, entre muchos otros temas de interés general.

Finalmente, cabe hacer notar que la transparencia y el acceso a la información no es una “moda” que le conviene seguir a los actores político electorales en México y que pueden utilizar para allegarse de militantes, simpatizantes y votantes; por el contrario, implican todo un entramado normativo que genera derechos y obligaciones que deben cumplirse, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y los organismos garantes locales jugarán un papel muy importante al vigilar y verificar el cumplimiento por parte de los partidos políticos de las disposiciones normativas que les resulten aplicables.

BIBLIOGRAFÍA.

Aguilar Rivera, José Antonio, *Transparencia y democracia: claves para un concierto*, Cuadernos de Transparencia número 10, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, 2008.

Holmes, Stephen, *Passion and constraint. On the theory of liberal democracy*, Chicago, University of Chicago Press, 1995.

Jeremy Bentham, *Táctica de las asambleas legislativas*, Burdeos, Imprenta de Pedro Beaume, 1829.

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Editorial Espasa, Vigésima Segunda Edición, España, 2016.

Guerrero Amparán, Juan Pablo, *Transparencia: de la abstracción a la operación de un concepto*, en Merino, Mauricio (coord.) *Transparencia: libros, autores e ideas*, México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública/Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2005.

Guerrero Gutiérrez, Eduardo, *Para entender la transparencia*, Nostra Ediciones, China, 2008.

Villanueva, Ernesto, *Aproximaciones conceptuales a la idea de transparencia*, en Merino, Mauricio (coord.) *Transparencia: libros, autores e ideas*, México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública/Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2005, pp. 63 y 64.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.